

Los miembros del G20 no pueden ser espectadores pasivos del asesinato de periodistas

La prometida de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, y el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire hacen un llamamiento al G20 para luchar contra la impunidad

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre ‘Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas’, y también aprobó una resolución para que se implementaran medidas firmes con el fin de luchar contra la impunidad. Hoy, más que nunca, hace falta una movilización a escala mundial en ese sentido, ya que más del 90% de los crímenes cometidos contra reporteros –tanto en países en guerra como en paz– permanecen impunes. Por si aún fuera necesario demostrar la ineludible necesidad de esta causa, podemos recordar asesinatos de periodistas que, por las circunstancias en que se cometieron, sus protagonistas o sus víctimas, tuvieron una repercusión especial.

Es el caso del asesinato de Jamal Khashoggi, cometido en el consulado de Arabia Saudí en Estambul y perteneciente a una categoría que creíamos olvidada: el “crimen de Estado”. Perpetrado por sicarios al servicio del gobierno saudí, fue planeado a un nivel político que el juicio en Riad se ha cuidado bien de no revelar. No basta que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman (MBS), haya reconocido de forma tardía su “responsabilidad” por este asesinato “cometido bajo su autoridad”. Este crimen mancha la reputación del régimen, que solo podrá limpiar su imagen cuando demuestre que ha asumido todas las consecuencias de este asesinato.

Un crimen de Estado requiere disculpas públicas auténticas, considera Agnès Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Seguimos esperando esas disculpas. De la misma manera que la familia de Jamal Khashoggi espera que se encuentren los restos del periodista y que se haga justicia por su asesinato. En el juicio, celebrado a puerta cerrada, no se respetaron las normas internacionales de justicia. Si cinco de los presuntos autores del asesinato son condenados a muerte, además de pensar que se trata de una dura sentencia, lamentaríamos que la justicia saudí haga callar para siempre a personas que conocen ciertos secretos de este caso.

Desde que ocurrió esta tragedia, el reino de Arabia Saudí ha continuado reprimiendo a la prensa con una violencia fuera de lo común. Al menos 32 periodistas –profesionales y ciudadanos– están encarcelados de forma arbitraria en el país. El doble de los que estaban presos antes de que el príncipe MBS asumiera el poder. Pocas veces el miedo había sido tan palpable, no solo en la península arábiga, sino en cualquier parte del mundo donde se encuentren los saudíes. En este contexto, el gobierno de Riad planea realizar a principios de diciembre un coloquio sobre medios de comunicación. Periodistas extranjeros y expertos en información han sido invitados al “Saudi Media Forum” para hablar de la libertad y la independencia de la prensa. Aunque desearíamos que fuera genuino, nos tememos que el evento sea pura ficción.

Además de la indignación de la comunidad internacional expresada el pasado octubre, las sanciones impuestas por los gobiernos de Washington, Ottawa, París y Berlín al puñado de individuos que presuntamente estuvieron involucrados en el asesinato de Jamal no han bastado para persuadir al reino de que modere su política de represión. Alemania ha sido el único país que ha dejado de vender armas a Arabia Saudí. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sugirió que la reputación internacional de Arabia Saudí podría mejorar si el gobierno pusiera en libertad al bloguero Raif Badawi, condenado a diez años de prisión y a recibir 1.000 latigazos. No obstante, hace algunos meses el presidente Donald Trump insistió en que Mohammed bin Salman posara a su lado, en primera fila de la foto en que la aparecen los dirigentes de las 20 mayores potencias del mundo reunidas en Osaka, Japón.

Desde hace dos años, los hijos de la periodista Daphne Caruana Galizia (en Malta), la hermana de Gauri Lankesh (en la India) o las familias de Javier Valdez y Miroslava Breach (en México), luchan para esclarecer la verdad sobre sus muertes. Hace tres años, en Burundi y Ucrania, los colegas de los periodistas Jean Bigirimana y Pavel Cheremet intentaron compensar la ineficiencia de la policía y emprendieron investigaciones ellos mismos para intentar averiguar por qué desapareció el primero y las razones por las que pusieron una bomba en el coche del segundo. Esta lista crece cada día. En México, desde el año 2000, al menos 150 periodistas han sido víctimas del crimen organizado y del círculo infernal de impunidad.

Los dirigentes del G20 deben actuar si de verdad quieren cumplir con el principio de responsabilidad. No es posible afrontar cabalmente ninguno de los grandes desafíos de la humanidad si no existe un periodismo libre, independiente, fiable y plural. Los jefes de Estado y de gobierno no pueden contentarse con ser los espectadores pasivos del asesinato de periodistas, en especial ahora que Arabia Saudí se prepara para asumir la presidencia del G20, que ejercerá durante un año.

Aceptar que una presidencia del G20 en manos del gobierno saudí sería como cualquier otra equivaldría a reconocer una forma de 'licencia para matar', de ahogar la verdad y de extinguir el pluralismo. Pedimos a los países que integran el G20 que no pisoteen la memoria de Jamal Khashoggi. Exhortamos a los dirigentes de estos países a hacer que Arabia Saudí adquiera compromisos claros a favor de la libertad de prensa, comenzando por dejar libres a los 32 periodistas encarcelados. Como Khashoggi señaló en su último editorial: "lo que más necesita el mundo árabe es libertad de expresión". Esto también es válido para el resto del mundo.

Por Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), y Hatice Cengiz, prometida de Jamal Khashoggi.